

EL SOCIALISTA

272

Centroamericano



Primera Quincena
Octubre 2018

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

"Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana"

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca

COSTA RICA.- ¡VIVA LA HUELGA GENERAL INDEFINIDA!



*** LA USSN DEBE POSTULARSE COMO UNA ALTERNATIVA DE PODER**

*** LA UNIDAD SINDICAL Y SOCIAL NACIONAL DEBE LLAMAR A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO A SUMARSE A LA HUELGA GENERAL!**

¡ABAJO EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO!



HONDURAS.- UN FALSO DIÁLOGO NACIONAL, LA CRISIS DE LOS LIBERALES, Y LA "MARGINALIDAD" OLVIDADA



GUATEMALA.- Administración neoliberal y privatizadora en la USAC



EL SALVADOR.- Trabajadores MINED exigen aumento salarial y Escalafón

¿Por qué hacer un PARO DE CONSUMO?

No podemos seguir financiando a un régimen criminal y sanguinario

El pueblo es la fuente monetaria para los Grupos Represivos (Policía y Paramilitares)

NICARAGUA.- ¿Paro Nacional o Paro de Consumo?

EL FUTURO INMEDIATO DE CENTROAMÉRICA SE JUEGA EN COSTA RICA Y NICARAGUA

En la región centroamericana se libran actualmente dos importantes luchas de masas. La primera de estas luchas se libra en Guatemala, Honduras y Nicaragua, con diferentes niveles de intensidad. Es la misma lucha por la democratización de nuestras sociedades, gobernadas por corruptas elites de burgueses y militares.

En Guatemala la lucha contra las mafias enquistadas en el Estado esta mediatizada por el ambiente preelectoral. En Honduras, las negociaciones entre las cúpulas, le están permitiendo al fraudulento gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) impulsar su proyecto de reformas controladas desde el poder, mientras la pobreza obliga a decenas de miles a migrar rumbo a Estados Unidos.

En Nicaragua la brutal represión de la dictadura contra los movimientos sociales de resistencia, por un lado, y las negociaciones secretas entre Ortega y el COSEP, más la benevolencia de Estados Unidos y la OEA, por el otro lado, han permitido que el gobierno Ortega-Murillo aún se mantenga con vida.

La excepción de esta primera dinámica parece ser El Salvador, país donde la imparable violencia y la decadencia de la economía, empujan al conjunto de la sociedad a la degradación y desintegración. El proceso electoral ha desviado el enorme descontento social en El Salvador, pero en cualquier momento tendremos un estallido social de enormes proporciones.

La segunda de estas luchas se libra actualmente en Costa Rica: es una vital batalla contra el ajuste neoliberal. El 10 de septiembre del corriente año se inició una huelga general indefinida, convocada por los sindicatos de trabajadores del sector público, en contra del Combo Fiscal, un proyecto de ley que contempla la aplicación de riguroso plan de ajuste fiscal que pretende elevar el IVA, reducir salarios y beneficios laborales del sector público, como una forma de reducir el histórico déficit fiscal.

El déficit fiscal es un cáncer que carcome las bases de todos los Estados en Centroamérica, sin excepción. Las causas de ese crónico déficit fiscal las encontramos no solo en la arraigada corrupción, sino que, fundamentalmente, en los tratados de libre comercio que reducen los aranceles e impuestos, en las exoneraciones y exenciones fiscales a los grandes capitales a la inversión extranjera y zonas francas. Estas políticas neoliberales conducen a la bancarrota de los Estados, y con ello conducen a nuestras sociedades al abismo.

La salida no es cargar con más impuestos a la clase media y a los trabajadores, sino aprobar reformas fiscales que obliguen a las grandes empresas y al capital transnacional a pagar los impuestos conforme sus ganancias.

Después de más de cinco semanas de huelga general del sector público, la situación en Costa Rica está llegando a su clímax. El gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), considerado así mismo como parte del "progresismo" latinoamericano, no ha escatimado maniobras sucias y hasta usar la abierta represión para contener el movimiento huelguístico.

EL gobierno de Carlos Alvarado no ha logrado imponer su proyecto de Combo Fiscal dentro de la Asamblea Legislativa, pero tampoco la huelga general indefinida ha logrado borrar el infame proyecto de ley. Quizá la explicación de este fenómeno se debe a que solamente la mitad del país está paralizada, la otra mitad, los trabajadores del sector privado, por la usencia de sindicatos, no han logrado entrar a la pelea contra el Combo Fiscal, un proyecto que afecta a todos los trabajadores y sectores populares.

Esta histórica huelga general indefinida del sector público ha sido posible porque las centrales sindicales y federaciones sindicales lograron superar sus divergencias, y han constituido la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN). Esta organización unitaria tiene el desafío de llamar a los trabajadores del sector privado a sumarse a la huelga general indefinida, alentándolos a organizar sus propios sindicatos.

Esta huelga general indefinida plantea de manera candente, una vez más, el problema del poder, de quien debe gobernar en Costa Rica. La USSN debe convertirse en una alternativa de poder. El triunfo de la huelga convertirá a los sindicatos en un poder alternativo, ante la decadencia de los partidos burgueses. ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 272
Primera Quincena
de Octubre 2018

Impresión:
16 de Octubre de 2018

DIRECTOR:

Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



UN BALANCE PRELIMINAR DE LA HEROICA HUELGA INDEFINIDA

Por José René Tamariz

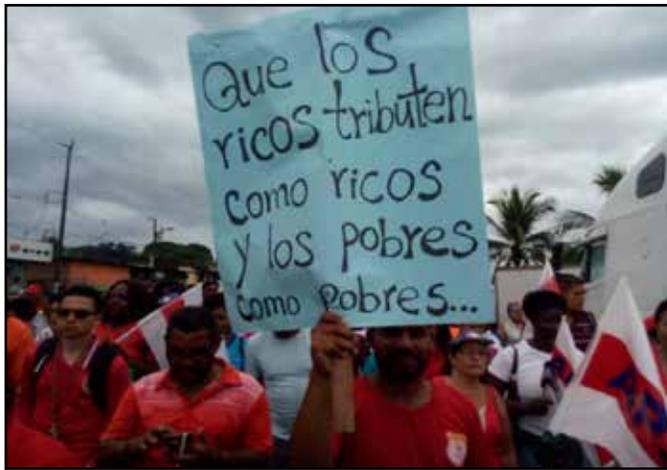
El presente artículo, escrito en forma esquemática, constituye una primera aproximación a un balance preliminar crítico de la gloriosa y heroica huelga indefinida, aún en curso, que se realiza contra el proyecto de ley de denominado "Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas", mejor conocido popularmente como "combo fiscal". No es un balance definitivo, sino un documento que procura generar la discusión y el debate de cara a mejorar los procesos de lucha y resistencia contra los futuros planes siniestros (empleo público, régimen único de pensiones y reducción del Estado) que el gobierno de Alvarado-Piza y la jauría neoliberal pretenden imponer sobre las espaldas de los trabajadores, sectores populares y sectores de clase medias, descargando el peso del déficit fiscal y el pago de la deuda pública sobre ellos y no sobre el gran capital nacional y transnacional.

1. El desarrollo de la huelga indefinida iniciada el 10 de septiembre y que se encuentra en su quinta semana se puede caracterizar como un proceso de lucha de resistencia y defensivo contra las pretensiones del gobierno y del conjunto de las fuerzas neoliberales y patronales de reducir los niveles de los salarios, de vida y del empleo de los trabajadores en general y, en particular a los trabajadores del sector público, sectores populares y de clase medias. La clase trabajadora y los sectores populares serán los mas afectados con la aprobación del combo fiscal como ley de la República, ya que su consumo se reducirá con el impuesto al valor agregado (IVA) a todos los productos de la canasta, servicios básicos como el agua, medicamentos, educación privada y todos los demás servicios en general. Los sectores de clases medias también verán disminuidos sus ingresos porque se gravarán con impuestos del 20% y 25% los salarios más altos.

2. Las fuerzas de la reacción quieren imponer, mediante la aprobación del combo fiscal tanto en primer debate, realizado el 5 de octubre con 35 votos a favor y 22 en contra, como en

segundo debate, eventualmente, que se realizará en el mes de noviembre, el pago del déficit fiscal al conjunto de los trabajadores, sectores populares y clases medias, mientras al gran capital nacional y transnacional les amplía sus exoneraciones y privilegios e indulta a los evasores de impuestos, desde el año 2008 hasta el 2017, en dos artículos transitorios del proyecto de ley.

3. La huelga indefinida alcanzó sus máximos picos de ascenso los



miércoles 12 y 26 de septiembre con la primera y segunda grandes movilizaciones nacionales en donde marcharon aproximadamente, primero, unos 500.000 huelguistas y, después, 1.000.000 de manifestantes. Sin duda alguna, esta gran huelga nacional indefinida ha sido en las últimas décadas el más grande movimiento de protesta social que se ha producido en el país. Además, es una huelga gloriosa y heroica y una de las más larga de la historia del movimiento sindical y social, en ese sentido se está haciendo historia. Mientras muchos plumíferos de los medios periodísticos del capital, así como personeros del Gobierno, la han dado por muerta en múltiples ocasiones, sin embargo, los trabajadores de los distintos sectores han demostrado sus grandes reservas y fuerzas levantando y empujando hacia adelante el movimiento huelguístico.

Tanto en la primera como en la segunda semana se produjeron diferentes de tipos de protestas, tales como marchas, tortuguismo, bloqueos intermitentes y otros tipos de acciones. Según un informe del

Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en la segunda y semana de la gran huelga "En total se registraron 243 acciones, con un promedio de 17,4, según el monitoreo hecho entre el 10 de setiembre (cuando empezó la huelga) y el 23 de ese mes. El método más utilizado ha sido el bloqueo de calles (137), seguido de marchas (42) y declaraciones públicas (22) ...". (Semnario Universidad, semana del 3 al 9 de octubre). En algunas provincias y ciudades las movilizaciones y otros tipos de acciones, así como roces y escaramuzas con las fuerzas policiales, han sido más fuertes, tales fueron los casos de Alajuela, Puntarenas y Limón.

Sin embargo, en la tercera semana, antes y después, de la segunda gran marcha nacional el nivel de la movilización tuvo altibajos en San José y algunas regiones, aunque en muchas otras regiones todavía las movilizaciones se han incrementado y mantenido fuerte. No obstante, el estado de ánimo, la moral y disposición a continuar la lucha en la mayoría de los sectores laborales no ha disminuido. La contrapropaganda del gobierno y de los medios informativos del gran capital, en algunos momentos, ha creado muchas veces confusión entre los huelguistas, pero las marchas y colectivización de las experiencias consolida a los manifestantes.

4. Esta heroica y grandiosa huelga indefinida ha contado con un gran apoyo de la población en general. En sus dos primeras semanas contó hasta con un 95% del apoyo popular. Aunque este apoyo ha disminuido en las últimas semanas, debido a la campaña de desprestigio de los medios periodísticos del capital y del gobierno. Sin embargo, en la cuarta semana de huelga el apoyo a la huelga era mayoritario en la población de un 52%. La razón de este amplio apoyo a la huelga indefinida se debe a que el combo fiscal es un proyecto antipopular, ya que las amplias mayorías de las comunidades se dan cuenta que es un plan que recarga de impuestos a los sectores laborales, populares y de clases medias, dejando intactos los grandes privilegios de los



grandes empresarios nacionales y transnacionales. Es muy importante mencionar que, al momento de escribir este informe, unos 36 gobiernos locales han votado en Consejo Municipal el rechazo del combo fiscal y están apoyando la huelga indefinida lo que refleja el amplio apoyo del movimiento huelguístico.

5. Sobre la Unidad Sindical y Social Nacional (USSN). La conformación de esta amplia alianza de sindicatos, federaciones sindicales, bloques sindicales y otras organizaciones sociales constituye un gran avance del movimiento sindical y social para enfrentar las políticas neoliberales del gobierno de Alvarado-Piza, tales como el combo fiscal. Esta unidad sindical y social debe avanzar hacia un movimiento mucho más amplio y democrático. Debe incorporar a organizaciones de otros sectores como las estudiantiles, comunales y otras. La estructura organizativa de la unidad sindical es muy vertical y burocrática, lo cual no permite una participación democrática de sus amplias bases de trabajadores, por tanto, es necesario formar comisiones regionales en los distintos lugares y funcionar mediante asambleas amplias para democratizar los espacios y que las bases puedan discutir, participar y hacer propuestas para que sientan incorporadas e identificadas con la amplia organización.

6. La calificación de huelgas en su mayoría declaradas ilegales, bajo distintos argumentos (políticos, de procedimiento, cantidad de participantes y de servicios "esenciales"), reflejan que la reforma procesal laboral fue una reforma realizada a la medida de las patronales y del gobierno para prohibir el derecho a la huelga. Aunque muchas declaratorias se encuentran apeladas por las organizaciones sindicales en segunda instancia lo más probable es que se ratifiquen la "ilegalidad" de la huelga en diferentes sectores, como clínicas y hospitales (salud), JAPDEVA (carga y descarga en muelles), RECOPE, municipalidades (aseo en poblaciones) y otros lugares por considerar los servicios que brindan esas instituciones como "esenciales", sectores en los cuales, según el artículo 376 del código de trabajo, es prohibido realizar huelgas. Muy pocas huelgas han sido declaradas legales, tales son los casos del Acueductos y Alcantarillados (A y A) e Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Por otra parte, las calificaciones de las huelgas como "ilegales" en los sectores no esenciales como CNP, Educación y otros sectores han sido politizadas y amañadas, lo cual refleja

claramente que los jueces de trabajos no son imparciales ni independientes, sino que siguen la línea política del poder Ejecutivo.

7. La aprobación por parte de la asamblea legislativa, en primer debate, del combo fiscal constituyó un golpe y duro revés, temporal no definitivo, del heroico movimiento huelguístico indefinido iniciado y dirigido desde el 10 de setiembre por la amplia alianza de diferentes fuerzas sindicales y sociales agrupadas en la "Unidad Sindical y Social". No es una derrota física, ya que no hay presos políticos, ni desaparecidos, ni muertos. En ese sentido, la mayoría de las fuerzas sociales están intactas y con disposición de lucha.

¿Por qué es un golpe y revés temporal? Porque el objetivo central y único de la huelga indefinida que era el retiro del combo fiscal de la asamblea legislativa no se logró. Más bien este ya fue aprobado en primer debate. Es cierto que falta el segundo debate y el fallo de constitucionalidad que debe emitir la sala cuarta para que dicho proyecto se convierta en ley de la República. Pero la primera batalla ya se perdió. En otro apartado explico porque no se logró conseguir el objetivo de la huelga indefinida. Sin embargo, esta primera etapa de la huelga indefinida deja algunos aspectos positivos, tales como que el combo fiscal no pudo ser aprobado en primer debate con 38 votos sino solamente con 35. Es decir que los neoliberales no lograron blindar el proceso de aprobación, en caso de que las consultas tanto a la Corte Suprema de Justicia como de constitucionalidad a sala cuarta planteen que se necesitan 38 votos para su aprobación en segundo debate y de que tenga vicios de procedimiento. Esto, en caso de producirse, significaría un duro revés a las pretensiones de los neoliberales de aprobar el combo fiscal sin tropiezos y escollos. El martes 16 de octubre la Corte Suprema de Justicia se reúne para brindar su informe sobre el combo fiscal y la consulta a la sala cuarta, en caso de que 10 diputados la soliciten, debe producirse su informe en el mes de noviembre. Existe expectativas generales en ambas consultas.

8. El conflicto de poderes: Ejecutivo-Asamblea Legislativa vs Poder Judicial. El informe votado afirmativamente por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre el combo fiscal original, sin los textos sustitutos, en el sentido de que su aprobación afecta la "organización y funcionamiento" del poder judicial refleja el conflicto de poderes que existe en el país. Ese informe afirmativo tiene vigencia y

aplicación para el texto votado en primer debate, lo cual significaría que se requerían de mayoría calificada de 38 votos para ser aprobado y de que no se podía aplicar la vía rápida, o sea, el 208 bis. Sin embargo, aún falta el criterio de la sala constitucional sobre este proyecto aprobado en primer debate, el cual podría ser favorable si los magistrados de la sala cuarta acogen los criterios de la Corte Plena, lo cual sería un serio traspié serio para la jauría neoliberal y un gran apoyo para el movimiento huelguístico, pero ese fallo puede tardar un mes. Tampoco hay seguridad que ese eventual fallo vaya a ser en dirección favorable, podría ser que los magistrados de la sala cuarta se inclinen a apoyar la decisión de los diputados del Congreso que votaron a favor del combo fiscal. Aquí existe una incertidumbre que tardará un rato por definirse.

¿Por qué la Corte Plena plantea que el combo fiscal afecta su "organización y funcionamiento"? Porque estruja el presupuesto del poder judicial poniendo en riesgo sus servicios de justicia en general. Reduce el crecimiento de los salarios, disminuye la cesantía de 12 a 8 años, congela las anualidades, la dedicación exclusiva, impone una nueva forma de evaluación interna y recorta otros beneficios. En una entrevista brindada por la magistrada de sala cuarta, Nancy Hernández, al semanario Universidad, ella decía que "Durante el siglo XX, el fortalecimiento de la administración de la justicia fue vista como una inversión necesaria, como una garantía, ahora se ve como un "gasto". En un entorno tan hostil de proliferación de organizaciones criminales, sicariato, trata de personas y la amenaza mundial del populismo y autoritarismo, la única apuesta posible es fortalecer el sistema de justicia en general. Hay que blindar el sistema judicial contra esta penetración... porque, si el crimen organizado y la corrupción se afincan en el sistema de justicia, perdemos el país". (Semanaario Universidad, semana del 11 al 17 de julio). He aquí las razones del conflicto de poderes señalado.

9. ¿Se podía detener la aprobación del combo fiscal en primer debate? Si se pudo detener. La huelga indefinida tenía la masividad y fuerzas para imponer su objetivo central. En la primera, segunda y tercera semana de gran ascenso del movimiento huelguístico se debía meter el acelerador, lanzando y haciendo todas las acciones posibles para doblarle los brazos a los neoliberales de la asamblea legislativa. La dirigencia de la unidad sindical y social perdió el tiempo, creando expectativas entre las



bases, en las llamadas conversaciones "preliminares" con personeros del poder Ejecutivo que no tenían ninguna capacidad de decisión. Además, nunca entendió que el gobierno los estaba engañando y vacilando con esas tales pláticas de mentirillas. Las estrategias eran, si se quería ganar, sumar nuevos sectores sociales a la protesta social y lanzar las acciones mas fuertes para obligar a negociar a diputados, no al poder Ejecutivo que no decidía nada ni tenía la capacidad de revertir la posición de los diputados del Congreso. Entonces, la principal responsabilidad de no haber logrado el objetivo de la huelga indefinida, en la primera etapa, recae enteramente sobre la dirigencia nacional de la unidad sindical y social que, además, no activaron todos los mecanismos y métodos democráticos de participación de las bases para hacer posible la victoria, además de los aspectos señalados anteriormente. En estos tipos de movimientos amplios se requiere de la más amplia democracia interna en la organización para garantizar una victoria, además de las estrategias más adecuadas, consultadas y votadas en asambleas democráticas.

10. La Calificación de Ilegalidad de la huelga en el Magisterio Nacional. Esta arbitraria declaratoria se produjo el martes 9 de octubre. Según el juez, Francisco Quesada Quesada, que calificó de ilegal la huelga en el magisterio nacional, ésta es "ilegal" porque fue, supuestamente, "Verificado y constatado que hubo hechos de violencia durante la huelga". En realidad, esta es una declaratoria de carácter eminentemente política, muy subjetiva sobre la conceptualización de lo que es la violencia, puesto que no tenían otros argumentos y fundamentos para poder hacer ese tipo de calificación.

Este juez, para justificar la "violencia" se apoya en imágenes de fotos de periódicos y de videos brindadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y en algunas "teorizaciones" de la violencia citando una resolución de la Suprema Corte de Justicia Argentina, lo cual no aplica en Costa Rica, el concepto de violencia de diccionario y de Elsa Blair Trujillo, que ha estudiado el conflicto militar de Colombia y otros países que no tienen relación con nuestra huelga. Todo esto refleja que el mencionado juez no tiene claridad ni bases sólidas

de lo que es realmente la violencia. La conceptualización de la violencia y los hechos para demostrar que la huelga fue ejercida de forma violenta por los trabajadores esta jalada del pelo, es arbitraria y subjetiva. En realidad, la violencia provino de parte del Estado. Esa calificación de la huelga como ilegal no resiste la mínima crítica y una buena defensa por parte de los abogados de las organizaciones del magisterio nacional (APSE, ANDE y SEC).

Más bien la violencia fue en contra de los huelguistas y ejecutada por las fuerzas policiales, antimotines y otros cuerpos especializados del Estado en el ejercicio de la represión. Este juez debería leer por lo menos al sociólogo, Max Weber que, citando al revolucionario León Trotsky, plantea que "Todo Estado está fundado en la



violencia" y que los instrumentos a través de los cuales el Estado ejerce la violencia son las leyes, los aparatos militares y policiales, los tribunales y las cárceles. Esa calificación de huelga más violenta y cercena el derecho a realizar huelga en Costa Rica.

El Ministro de Educación, Edgar Mora, todo entusiasmado llamó a todos los trabajadores de la educación a incorporarse al día siguiente a clases. Sin embargo, al día siguiente los sindicatos ANDE y SEC convocaron a asambleas en donde se sometió a discusión y votación un documento de la unidad sindical en donde se planteaba hacer una "pausa" de la huelga, léase deponer la huelga, y continuarla en el segundo debate, pero de forma mayoritaria las bases rechazaron esa propuesta y decidieron continuar la huelga. Esto constituyó un golpe para las pretensiones del gobierno que daban, por enésima vez, por muerta la huelga indefinida. Por su parte el sindicato APSE no sometió

ese documento a discusión, ya que se daba por un hecho continuar la huelga a pesar de esa declaratoria amañada. De esta forma, se apelará ese fallo arbitrario y se esperará la declaratoria en firme para tomar una decisión sobre el futuro de esta gloriosa y heroica huelga indefinida.

11. ¿En qué momento y situación nos encontramos? Aunque la aprobación en primer debate del combo fiscal ha golpeado a compañeros, sin embargo, no ha producido desmoralización ni desbandada entre las fuerzas en lucha del movimiento sindical como esperaba el gobierno y los neoliberales. Algunos sectores sindicales de la unidad sindical y social sobre los cuales pende la declaratoria de ilegalidad de la huelga, en segunda instancia, se replegaron el 5 de octubre y 11 de octubre tales son

los casos de salud (UNDECA, SINAES, SIPROCI MECA, ANPE y otros), otros sectores más pequeños, negociaron con las jefaturas, también su reincorporación al trabajo; mientras tanto, otros sectores decidieron sostener la huelga hacia adelante, tales son los casos del ICE, Magisterio Nacional, diversas municipalidades, el sector judicial y otros. En algunas regiones como en Pérez Zeledón la huelga indefinida, en su quinta semana, lejos de disminuir su movilización aumentó el día 11 de octubre cuando se realizó una gran movilización de todas las fuerzas de la región, educadores, agricultores, comunidades, iglesia católica e iglesias cristiana en contra del combo fiscal. Las movilizaciones continúan a lo largo de todo el territorio nacional, así como las campañas de información en las comunidades que tienen acogidas de las poblaciones que rechazan el combo fiscal y los conversatorios se realizan en distintos lugares para motivar la continuidad del movimiento que se ha convertido en una cuestión nacional. Mientras tanto, se está a la espera de las declaratoria en firme de la calificación de la huelga en el magisterio nacional y otros sectores, así como de los resultados de las consultas de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Constitucional. ■



MURPHY PAIZ: ADMINISTRACIÓN NEOLIBERAL Y PRIVATIZADORA EN LA USAC

Por Tyscho

La política de la zanahoria y el garrote es: "Una política que ofrece una combinación de recompensas y castigos para inducir comportamiento". La más conocida expresión gráfica del concepto es la de un burro al que se le coloca una vara larga atada a la cabeza, con una zanahoria colgando al frente del burro y alguien atrás con un garrote, golpeándole mientras este sigue su camino hacia una zanahoria inalcanzable, pero eternamente anhelada.

Lo anteriormente dicho es por excelencia la política que los agentes del neoliberalismo han empleado en toda Latinoamérica desde los años 80s, para llevar adelante sus programas, de quebrar las instituciones públicas de los Estados nacionales, para así "salvarlas milagrosamente" por la iniciativa privada, vista falsamente como la administración eficiente y necesaria en contraposición a la administración pública, torpe e ineficiente; claro, esto promovido por los sabotadores que se harán de jugosas ganancias al vender partes del bien público a la iniciativa privada a precios de remate.

La actual administración de la única universidad pública del país –nuestra USAC– es una suerte de garrotero que busca consolidar la privatización iniciada por las dos administraciones pasadas (Estuardo Gálvez y Carlos Alvarado) siendo el primero padrino directo del actual Rector. En estas líneas ejemplificare por medio de la exposición de las últimas acciones administrativas, que demuestran clarificadoramente el programa privatizador de estos esbirros, que con emblemas, frases y publicidad barata nos timan con la zanahoria que nunca llega, mientras sistemáticamente al garrotazo de la privatización nos despojan de los bienes de todos, de la

universidad de todos.

El acoso sistemático a los vendedores formales e informales

Existe un buen número de estudiante que se dedican a negar la realidad guatemalteca desde su burbuja abyección –los que dicen que la universidad no es un mercado por ejemplo–, para todos los demás no es nada nuevo, saber que Guatemala no tiene la cantidad de puestos de trabajo



formales necesarios para los más de 200 mil jóvenes que cada año terminan sus estudios de diversificado, de los cuales solo unos 18 mil podrán alcanzar un trabajo o seguir sus estudios superiores.

Quizá solo para quienes no conocen o se niegan a aceptar la realidad social de los otros, ponerse en los zapatos de los más, esto nuevo; comprender que en Guatemala el mercado laboral no tiene puestos de trabajo formales para la mayoría de los jóvenes que entre los 18 y 35 años se encuentran en la plenitud de su edad laboral. En Guatemala el trabajo formal solo cuenta con el 20% del Producto Interno Bruto (P.I.B) mientras el trabajo informal y las remesas se disputan el 80% restante de la renta nacional. Un país de desempleados, donde los pocos empleados que gozan –cada día menos– de las prestaciones de ley se creen erróneamente burgueses o capitalistas.

Entonces es normal, ver que la gente haga su vida y se rebusque diariamente el alimento, no solo propio sino el de sus familias. Perseguidos por los policías municipales –cuasi cuerpo parapolicial– que arremete violentamente contra los vendedores informales, golpeándoles y hurtando sus ventas, es aún más razonable que muchos de estos buscaran en la autonomía universitaria un espacio libre del acoso sistemático al derecho al trabajo, para dignificar una vida por lo más difícil de mantener en una realidad adversa como la de la mayoría de los paisanos.

Pero este espacio donde los más han tratado de buscar dignamente el sustento diario, más temprano que tarde será trastornado por las actuales autoridades universitarias, que al ignorar el problema estructural del trabajo en Guatemala buscan ya desde hace dos semanas intimidar tanto a los trabajadores informales que hacen su vida diaria en la USAC, como a los comerciantes formales que desde largo tiempo atrás –algunos durante más de 20 años– poseen los llamados kioscos para la venta de alimentos.

Con dos diferentes garrotes han iniciado su primera arremetida los esbirros de la actual administración; el Reglamento de para la Actividad Comercial efectivamente ilegaliza toda actividad comercial no aprobada por la división para la Actividades Comerciales de la Dirección General Administrativa (DIGA) de la USAC, pero el reglamento se respeta y se aplica en parte por las autoridades, ya que no es a todos los vendedores que usan corredores, plazas y demás áreas públicas dentro del campus, sino solo a los que no pagan el derecho a piso a la DIGA – que va desde los 600 hasta los 2000



quetzales por mes, dependiendo de los mts usados—. Muchos de los vendedores son mantenidos artificialmente en la informalidad por la misma DIGA, que rechaza constantemente las solicitudes de formalización de los vendedores.

Con los vendedores de kioscos la situación parece más irregular; muchos de los negocios son de larga data, reconocidos por el propio estudiante que consume con regularidad alimentos y establece relaciones de afectividad con las y los comerciantes. Dos meses atrás la situación ha cambiado, negocios que han brindado bienes y servicios durante más de dos décadas a la población universitaria, sospechosamente empiezan a salir negativos en las pruebas microbiológicas que con regularidad debe realizar la unidad de salud, para asegurar que la sanidad de los alimentos sea adecuada para el consumo humano. Claro, como todo bajo el sol sancarlista no es contradictorio a las irregularidades que en el Estado suceden diariamente, se les ha notificado últimamente a los vendedores “formales” de sus pruebas negativas, sin las evidencias del caso, así como las practicas irregulares de poner a estudiantes contraviniendo el mismo Reglamento de Actividad Comercial que dispone que deben ser los profesionales a cargo del laboratorio de alimentos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia los que deben realizar dichos exámenes, remitiendo a la Unidad de Salud los resultados para notificar a los vendedores, con las pruebas del caso, no con la mano de mono propia de la administración universitaria.

Junto a esto el acoso sistemático debido al legítimo accionar de los vendedores que exigen pruebas de los exámenes, así como exigir los derechos que como arrendatario debe brindarles la DIGA al mantener remozados los kioscos y prestar todos los servicios que un arrendatario por ley le debe a sus inquilinos, que incluye agua corriente y potable, energía eléctrica y servicios sanitarios, cosa que no ha cumplido desde la implementación de dicho reglamento. Los primeros que han presentado resistencia al acoso de la DIGA hacia los vendedores han sido

los mismos estudiantes que respaldan a los comerciantes, trabajadores y trabajadoras a los que se les compra diversidad de productos, así como bienes de consumo necesarios para el desenvolvimiento de la vida académica diaria.

Detrás de ese creciente acoso se encuentra la sombra del desalojo de vendedores formales e informales, para introducir presumiblemente de manera generalizada cadenas de comida rápida. No es nada raro que empresas como Café Gitane con exámenes negativos de sanidad o Pizzería Al Macarone, no padezcan de estos acosos, ni sean amenazados de desalojo ya que lo único que buscan es negociar con las grandes cadenas el ingreso de dinero constantes a la menguada tesorería de la USAC, tan necesitada de dinero para tapar el hoyo de la corrupción, así como el déficit del presupuesto.

El préstamo millonario con el BANTRAB

Un mes atrás los trabajadores de la universidad de San Carlos se toparon con la noticia que debían apresurar el cierre de sus cuentas bancarias donde se les remite sus pagos en el banco G&T Continental y la apertura apresurada de una en el Banco de los Trabajadores (BANTRAB). Con este movimiento se hacen más fuertes las especulaciones que indican la administración a falta de coraje de defender la asignación que por ley les corresponde, han optado por solicitar un préstamo millonario al BANTRAB –con las tasas más altas de interés del mercado– para así poder cerrar el año, usando las cuentas monetarias de los trabajadores, los bienes y activos de la USAC como garantía de pago, de un pago que no será saldado en esta administración, sino cargados sobre los costos de las generaciones venideras.

Así es que, por medio de la organización de actividades deportivas, como la carrera que el sábado pasado se celebró en la USAC, donde a los primeros 1000 participantes se les facilito su camiseta deportiva del BANTRAB, obligando en muchos casos a los mismos trabajadores de la USAC a correr, como es ya tradición

en las carreras organizadas por la municipalidad de Guatemala.

Una carrera no tapara la huelga que el lunes 8 de octubre protagonizaron los trabajadores de la división de servicios de la USAC, al conocer que la administración cancelo el pago de la recolección de basura del campus central que era contratado a una empresa externa, dicha acción entra en el antipopular plan de ajuste de la USAC para cargar sobre los trabajadores, los estudiantes y los docentes el costo de administraciones corruptas pasadas, así como la incapacidad de la actual administración de exigir el presupuesto que nos corresponde.

Un plan de lucha que en unidad venza la privatización

El plan de ajuste de la neoliberal administración de Murphy Paiz es un programa holístico de golpear los bolsillos de estudiantes, trabajadores y docentes no presupuestados. Tanto los trabajadores informales como los formales deben luchar en unidad para exigir por medio de sus organizaciones una solución integral al problema de la informalidad dentro de nuestra universidad, así como el cumplimiento de las obligaciones que la administración tiene para ellos.

El ajuste que la administración que ya ha iniciado a cargar sobre estudiantes, trabajadores y docentes debe combatirse en unidad, querremos todo el presupuesto que por ley le corresponde a la USAC, así como su incremento derivado del crecimiento de la población universitaria y el coste de los servicios. Querremos transparencia en el gasto y cero de la corrupción administrativa que mengua las cuentas de nuestra universidad. Si las autoridades desean ajustar los gastos de la universidad, que inicien por bajarse sus jugosos salarios. La unidad de los trabajadores, los vendedores, los estudiantes y los docentes es necesaria para detener la privatización de la educación pública reanudada por la actual administración. ■

UN FALSO DIÁLOGO NACIONAL, LA CRISIS DE LOS LIBERALES, Y LA “MARGINALIDAD” OLVIDADA

Por Horacio Villegas

Estamos seguros de la falsedad que representa el diálogo nacional promovido por la ONU, el gobierno nacionalista y ciertos sectores de la Oposición; pues es una maniobra dilatoria que deja entrever la instauración gradual de la dictadura del Partido Nacional. Por otro lado, la crisis que el Partido Liberal ha tenido recientemente, alimenta ese juego aparentemente resolutivo de la crisis que vivimos luego de las elecciones de noviembre del año pasado.

El diálogo nacional o la farsa de los consensos entre la dictadura y la Oposición

El diálogo nacional, convocado por los nacionalistas y ciertos sectores de la oposición como el Partido Liberal, en acompañamiento de la ONU, se ha vuelto una excusa dilatoria, que no hace otra cosa que acomodar, a paso lento, la instauración de la dictadura.

Las posturas en el inicio del diálogo nacional, que se ha estructurado en cuatro mesas de trabajo, redundaron en señalamientos de un lado y de otro: del partido de gobierno hacia la oposición asegurando el ficcional acontecimiento del papel de las maras en las elecciones de noviembre del 2017, quienes aparentemente obligaron a los votantes nacionalistas a no ejercer el sufragio por su repulsión al partido nacional. Los nacionalistas como es de costumbre, se victimizan utilizando como plataforma perfecta este diálogo, en donde achacan hechos adulterados a la oposición.

De parte de Salvador Nasralla y los liberales hacia los nacionalistas, apuntando sus actos corruptos y fraudulentos desde las elecciones del 2013 hasta la fecha. Una postura atinada, con señalamientos que a la par llevan evidencias, pero vertidos y expuestos en un espacio controlado por el gobierno en contubernio de los gringos.

El supuesto diálogo, como se ha visto en el transcurso de las semanas y meses desde la crisis post-electoral,

es una falsedad; una trampa en la que cayeron los representantes de los partidos tradicionales, tildados de opositores; quienes a su vez siguen encontrando en el “orden” de la democracia burguesa y en la aparente “ayuda” internacional de los Estados Unidos, la única salida al conflicto latente en que sobresalió a punta de fraude y represión, el partido de gobierno.

Crisis a lo interno del Partido Liberal

El pasado 26 de septiembre el Partido Liberal abandonó el diálogo nacional por un motivo preciso: la aprobación en el Congreso Nacional de la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP). En donde se eligió una comisión en donde están representados los partidos Liberal, Nacional y Libre.

La votación de varios miembros de la bancada del Partido Liberal a favor de esta intervención del RNP, provocó la moción de Luis Zelaya de expulsar a los 17 miembros, moción aceptada por el Concejo Central Ejecutivo (CCEPL).

Por su parte la fracción del Partido Liberal que no comulga con Luis Zelaya, quienes están en la lista de expulsados, encabezada por Elvin Santos –uno de los principales corruptos del caso Pandora– decidió solicitarle a la ONU su entrada al falso diálogo nacional, a sabiendas de los veredictos del Comité Central de su partido.

Los 17 diputados expulsados según declaraciones de Luis Zelaya, no podrán votar en el Congreso Nacional representando al Partido Liberal. Lo que abre el camino a que entren a las filas de otros partidos, o simplemente estén de diputados independientes.

La intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP)

Coincidimos con el analista político de CESPAD, Gustavo Irías, quien afirma en un artículo dedicado al tema de la intervención del RNP, que “una salida a la actual crisis política no será el espacio del diálogo político”,

pues las voluntades de los políticos representantes de la oposición y el gobierno, piensan dejar la supuesta resolución del conflicto político post-electoral en las determinaciones obtusas del Congreso.

Los intereses de la oposición ahora se concentran en tener representantes en esta institución que maneja en bruto la cantidad de cédulas de identidad de hondureños aptos para el sufragio. Tal parece que ahora la batalla “antigubernamental” definida por la oposición es la espera de nuevas elecciones, para lo cual son necesarias las reformas electorales y la intervención del RNP, y no las movilizaciones y el desacato y rechazo a cualquier negociación que orille a la trampa de postergar aún más la lucha por la caída del gobierno.

La marginalidad: un tema olvidado por los partidos tradicionales

A finales del siglo XX, Honduras atravesaría una de las crisis naturales más agobiantes y desastrosas: el huracán Mitch. Lo que repercutiría significativamente en el inicio de los años del nuevo siglo XXI. La pobreza, y la marginalidad social en su matiz más crudo –agudizada por esta catástrofe ambiental–, salieron a relucir como la condición más patente en la historia reciente del país.

Los gobiernos liberales y nacionalistas que asumieron la crisis en aquel entonces, no llegaron a subsanar semejante tragedia; más bien fueron los promotores de varios episodios de corrupción que ponían en precario la ya situación difícil del pueblo hondureño. Tanto la administración del liberal Carlos Flores Facusse, la del nacionalista Ricardo Maduro, y las subsiguientes de colorados y azules, no remediaron sustantivamente la condición de las personas que entraron de lleno en la marginalidad, luego de perder sus casas y demás bienes.

Fuera de los risibles programas asistencialistas de entregar migajas en manos de las personas más empobrecidas del país, no ha existido



una verdadera estrategia que mitigue gradualmente este flagelo. El proselitismo ha llegado y sigue llegando, cada cuatro a estos barrios marginales, sin ninguna solución creíble y de largo plazo; lo que pone en el primer plano de culpabilidad de estas condiciones inhumanas, a los partidos tradicionales.

Desde el sábado 7 de octubre, las instituciones encargadas de hacer llegar los pronósticos del tiempo, tardíamente declararon una alerta roja en los departamentos del centro y sur del país. Este pronóstico no fue dado en el tiempo debido ya que arremetería con los planes absurdos del gobierno de complacer a los empleados públicos con su aclamado "feriado morazanico"; que no es otra cosa que propaganda gubernamental.

Las lluvias no cesaron por 24 horas, y fue suficiente para que la capital entrara en colapso debido a los desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos. Hasta el momento se contabilizan 7 muertos, 7 mil damnificados, 750 casas dañadas y varias zonas incomunicadas por las lluvias.

Esta nueva crisis, ocasionada por causas naturales, y que se asemeja a la que ocurriera en 1998 con el huracán Mitch, vuelve a traer al escenario público, la condición precaria en la que se encuentra una gran mayoría de la población hondureña. Esta crisis demuestra la ineptitud de las instituciones como COPECO y el mismísimo alcalde de la capital, quien ha modificado únicamente las calles, haciendo puentes y arreglos estrictamente para la población que posee vehículos, y no un verdadero reubicamiento de las familias que viven en las vegas de los ríos.

No podemos esperar menos de estas administraciones burguesas, que hacen a un lado el tema de elemental urgencia, como lo es la reubicación de personas que viven en la más sórdida marginalidad. Es necesario señalar a los verdaderos responsables de la muerte de estos hondureños que lucharon por salvar su vida en medio de inundaciones y derrumbes; los culpables han sido los recalitrantes grupos económicos, traducidos en

nombres y apellidos concretos como los Facusse, Atala, etc, que han desalojado a miles de personas que tienen el derecho legítimo a la tierra en la capital. Ellos, en contubernio con las administraciones de los partidos tradicionales, han modelado los centros urbanos a su conveniencia, excluyendo a sectores históricamente marginalizados.

La migración hacia EEUU

La intensificación de las migraciones hacia los Estados Unidos de Norteamérica es un hecho que los hondureños hemos tenido que sufrir desde hace algunas décadas atrás.



Los factores de este fenómeno son múltiples; entre los más determinantes se encuentra el derrumbe y saqueo del Estado hondureño por parte de los partidos políticos tradicionales, quienes con las ganancias jugosas que extraen de la corrupción, impiden la generación de empleos y otros beneficios en pos de eliminar la pobreza extrema entre los hondureños.

Otro factor que pesa en este fenómeno, y que se puede señalar conjuntamente con el desenvolvimiento de la historia política del país, son las políticas de intervencionismo directo de Estados Unidos en los asuntos internos de los países centroamericanos. Desde el siglo XIX este país del norte ha tenido una estricta política de control económico y político de nuestro territorio y su gente; lo que se traduce en saqueos y acuerdos legales injustos que no le ofrecieron beneficios directos a los débiles gobiernos liberales: dígame el saqueo de madera, metales preciosos y a principios del siglo XX las

bananeras.

Esta relación desigual no permitió que el país encontrara la suficiente independencia económica y política frente a los países imperialistas como Estados Unidos. Relación que nos definió como dependientes. Bastó, con que a finales del siglo XX el huracán Mitch destruyera nuestra débil economía, para darnos cuenta de esta condición impuesta por otros países extranjeros. Desde esta crisis que irrumpiera en 1998, y de ahí en adelante, la historia reciente del país se ha ido configurando alrededor de la migración hacia los Estados Unidos. Muestra de ello es la gran caravana de migrantes que desde ayer inician su recorrido hasta llegar a la USA.

El gobierno de JOH, con el consentimiento de la administración Trump, han declarado recientemente como violadores de derechos humanos a los grupos no estatales como los mareros, quienes a su vez son considerados los únicos culpables de estas multitudinarias caravanas, precisamente por las acciones de cobro del

impuesto, asesinatos a empleados del sector transporte, etcétera. Lo cierto es que desde del Golpe de Estado del 2009, y ahora con el gobierno ilegítimo, continuista y corrupto de los nacionalistas, es que se ha agudizado esta crisis que lleva a los hondureños hacia un país que no los recibe de la mejor manera.

La embajada de EEUU en Honduras ha declarado el día de hoy que "la situación en Honduras ha mejorado notablemente, y esta tendencia sólo continuará si sus ciudadanos permanecen e invierten su extraordinario potencial aquí" (Declaración sobre la caravana de migrantes. Embajada de los Estados Unidos en Honduras, 14 de octubre de 2018). Es más que evidente el cinismo de los gringos, quienes históricamente han sido cómplices de la dependencia económica, de la imposición de dictaduras, y al fin y al cabo de la pobreza en que vivimos hoy los hondureños. ■



¿QUIÉN PODRÁ DETENER EL AVANCE DE BOLSONARO?

Por Leonardo Ixim

El resultado de la primera vuelta en las elecciones generales ubicó como puntero al ultraderechista Jair Bolsonaro con 46.03 por ciento de los votos contra el candidato del ex gobernante Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, con el 29.28 % de los votos. Eligiendo además la totalidad de la Cámara de diputados, dos tercios del senado pues el otro tercio de 81 en total fue electo en 2014, algunos gobernadores y cargos municipales.

Ambos disputarán la segunda vuelta, al no alcanzar el 50 % de los votos válidos, el próximo 29 de octubre, sustituyendo a Michel Temer (impuesto tras el golpe parlamentario contra Dilma Russef) cuyo partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB) cayó súbitamente en los resultados producto de los bajísimos índices de popularidad de Temer, debido a la aplicación de políticas de ajuste sobre el pueblo brasileño.

Con una participación del 79.7 % del padrón electoral, es decir el 107,050,673 votos, baja levemente la participación en un 0.9 % en comparación a las elecciones de 2014, donde resulto re-electa Russef. Los votos nulos y blancos se situaron en 10,313,141, en las elecciones de 2014 fueron 11,099,068 votos; sin embargo, propiamente los nulos se situaron en un poco más de 7 millones, mientras que en la pasada elección fue un poco más de 4 millones, según datos del Tribunal Supremo Electoral.

Los votos nulos y blancos se sitúan en tercer lugar, expresando el malestar de parte de la población brasileña para con la casta politiquera que ha gobernado ese país desde el retorno a la democracia en 1985, que se traduce de varias formas.

El fenómeno de Bolsonaro

Una de ellas sería la victoria de Jair Bolsonaro, junto al candidato a vicepresidente Antonio Hamilton Murua, postulados por una alianza de dos pequeños partidos: el Social Liberal del primero y el Renovador Laborista Brasileño del segundo, obtienen 49,276,990 votos. Con un discurso extremadamente conservador, ambos candidatos ex militares en campaña mostraron su simpatía con la dictadura militar que gobernó por 21 años desde 1964 a 1985 y usaron el lema "Brasil por encima de Todo, Dios por encima de Todos".

Bajo este perfil, su enfoque con

respecto a situaciones sociales y culturales tales como: la oposición a libertades y equiparación de derechos a mujeres, minorías étnicas, raciales y sexo-diversas; contra el aborto y la educación sexual, misóginos con ideas tales como la supuesta inferioridad de las mujeres con respecto a los hombres. Hacia tendencias fascistas, apostando a salidas militaroides relacionadas con la seguridad pública, contra la movilización social, enemigos de las libertades civiles, continuadores de la agenda criminalizante a las juventudes afrodescendientes que tienen los mayores índices de pobreza y desempleo.

Sin ser propiamente fascista como la izquierda reformista y algunas tendencias marxistas lo consideran, no pretende -por lo menos ahora- romper el régimen político representativo democrático usando



bandas armadas de población lumpen y de la pequeña burguesía. Sin embargo, eso no quita su peligrosidad, al expresarse en discursos contra lo que denominan el marxismo cultural y la "ideología de género" con argumentos similares al anti-comunismo, y su pretendida defensa de los "valores nacionales". Plantean combatir los derechos y libertades de la clase trabajadora, las mujeres, las minorías étnicas y los jóvenes, centrándose por ejemplo en el tema de que la escuela pública debe ser libre de esas "ideologías".

Una de sus bases sociales son las iglesias cristianas neo-pentecostales; junto a Guatemala y Honduras, Brasil es uno de los países con mayor población de esa religión. Sectas caracterizadas por una lectura fundamentalista de la biblia y por arremeter contra los derechos humanos. Habiendo en los últimos años un crecimiento de partidos en la región orientados por estas sectas que buscan hacer retroceder el carácter laico de los Estados. Es importante anotar que el primero en dar alas a esas corrientes en Brasil fue el mismo PT, al aliarse con partidos de esa naturaleza nombrando ministros (pastores) de esas denominaciones en sus gobiernos.

Presentándose además como opuestos a los políticos y enemigos de la corrupción, tratando de ubicarse como outsider de la política tal como lo han hecho Duque, Morales o Trump. Cuando al igual que estos fueron durante mucho tiempo políticos de poca monta o empresarios con pretensiones políticas; en el caso de Bolsonaro, ha sido durante mucho tiempo diputado por el estado de Río de Janeiro y concejal de la capital de ese estado, generándole apoyo en sectores de las capas medias acomodadas tradicionalmente anti-comunistas y proletarios de las ciudades cansados por la violencia delincinencial y la corrupción.

Además, contó con el respaldo de la cúpula militar quien condicionó al sistema de justicia para que encarcelara al ex presidente Lula. Usando la denominada lucha contra la corrupción, por medio de la operación Lava Jato sobre sobornos de empresas a varios políticos entre ellos del PT a cambio de obras, bajo el actuar del juez Sergio Moro – en Brasil los jueces sustituyen el papel de los fiscales- formado en Estados Unidos; encarceló una candidatura que representaba millones de votos y no a otros políticos también señalados.

El PSL por tanto, logra 51 escaños en la Cámara de Diputados de uno que tenía antes y cuatro senadores de ninguno que tenía. No consigue ningún gobernador, pero aumenta el número de diputados estatales, alcaldes y concejales municipales, convirtiéndose en la principal fuerza en los estados del sur tradicionalmente conservadores y en el centro industrializado donde durante mucho tiempo el PT fue mayoritario.

Los mercados se congratulan a pesar del PT

Al nomás conocerse los resultados el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo mostró un alza de 5.82 %, ubicándose 82.291 puntos, mientras que el dólar se cotizó a la baja con respecto al real brasileño. Pese a que en los últimos días revistas como The Economist, diarios de los principales centros imperialistas como The New York Times y las agencias calificadoras de riesgo había mostrado su desconfianza por los discursos altisonantes de Bolsonaro. Al igual que con Trump, al acercarse Bolsonaro a la presidencia, los mercados se tranquilizan, sumándose al carro del reaccionarismo.

En Brasil los factores de la burguesía



fueron sumándose ante la caída en las encuestas de sus principales candidatos como Gerardo Alkmin del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) partido que disputó el poder al PT en los últimos años, ubicándose ahora en el quinto puesto con un poco más de 5 millones de votos, reduciendo 2 senadores y 25 diputados y no logrando ninguna gobernación. Enrique Mirelles del MDB que se ubicó en el octavo puesto con apenas 1,20 % de votos, reduciendo 32 diputados y 6 senadores y solo logrando la gobernación del estado de Alagoas; o Marina Silva del partido Rede quien había sido la candidata sorpresa en 2014 ubicándose en tercer lugar y ahora se ubica en noveno puesto con un insignificante uno por ciento.

La mayoría de la burguesía industrial del estado de Sao Paulo se fue sumando al apoyo que ya tenía del agronegocio, la banca, la bancada de la bala y la biblia; que buscarían aplicar reformas anti derechos: reducción de las pensiones, privatización de empresas públicas, destrucción de derechos sociales, fin a toda regulación laboral y recortes de gastos en el presupuesto para pagar deuda pública en el Congreso de ese país, que Temer no pudo aplicar.

Pero el ascenso de Bolsonaro, no se puede explicar sin el declive del PT quien durante sus cuatro gobiernos (dos de Lula y dos de Russef) asumió con más fuerza su papel de ser la pata "progresista" del régimen político post dictadura, en clara alianza del denominado centro del MDB partido procedente de la época dictatorial siendo la oposición en ese momento y después convertido en la plataforma del clientelismo político. Aliándose además con una serie de partidos reciclados que ahora se coaligaron tras Alkmin, aunque para los gobiernos estatales realizó tales alianzas.

En el plano económico el PT continuó el modelo neoliberal sin seguir privatizando empresas, pero sin revertir ninguna privatización anterior, aunque ya en el segundo mandato de Russef se realizan concesiones petroleras. Además de no aplicar ningún tipo de regulación fiscal al agronegocio, las grandes industrias y las constructoras contratistas de obras públicas -quienes se expandieron en la región y el sur de África- como OAS o Odrebrecht, obteniendo grandes ganancias. Empresas como estas últimas que bajo colaboración eficaz dentro del Lava Jato se les exculpó de delitos relacionados a corrupción, inculcando a los políticos de todos los partidos, pero centrándose en los del PT, acusando a Lula del regalo de una propiedad.

Haddad, ex ministro de educación en el gobierno en los gobiernos del PT y alcalde de Sao Paulo entre 2013-2017 y su candidata a vice presidente Manuela D'Ávila del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) agrupación de origen maoísta convertida en oportunista;

fiel a esa línea de colaboración de clases trataron en todo momento de congraciarse con la burguesía anunciando la aplicación de políticas similares a las aplicadas en el segundo gobierno de Russef, como fueron recortes a los programas sociales y los seguros de desempleo, programas del gobierno de Lula que fueron un éxito en disminuir la pobreza, mas no la desigualdad social.

Las repercusiones al PT se tradujeron en que en las elecciones de 2014 casi pierde la presidencia, al perder sectores que se habían manifestado contra el exceso de gastos en infraestructura deportiva en 2013 y la poca inversión social. Repercutiendo que a la hora del golpe parlamentario -también bajo un pretexto fabricado- no lograra movilizar a su favor a las masas, que debido al control burocrático sobre las grandes centrales sindicales privilegiaron la negociación con partidos burgueses, que al derrocamiento de Temer.

Esto se tradujo en la derrota y pérdida de varios municipios en las elecciones municipales de 2017 y ahora, en una caída de los votos en un poco más de 11 millones, situándose en 31,349,355 votos, la reducción de 6 senados y 13 diputados, obteniendo solamente tres gobernaciones y disminuyendo en otros cargos de elección. En lo que respecta a la presidencia fue una reducción significativa, aunque no tan estrepitosa como la del PSDB que fue de más de 29 millones de votos.

El escenario que se abre

Sin embargo, el crecimiento de Bolsonaro también se debió al miedo racista de sectores acomodados opuestos a los programas sociales del PT y paradójicamente de algunos sectores populares que mejoraron sus ingresos vía estos programas, expresando prejuicios conservadores explotados por las campañas de miedo.

Además del fraude sobre 1.5 millones de votos en el nordeste al suprimirlos del registro biométrico -logrando pese a todo las gobernaciones de Bahía, Ceara, y Piauí permitiéndole llegar a segunda vuelta, mientras su aliado (PCdoB) ganó Maranhão- zonas con mayor pobreza y desigualdad, fraude que repitió en todo el país sobre 3.3 millones de votos.

El candidato Ciro Gómez del PDT -quien en 2014 apoyó a Russef- heredero del getulismo, partido que durante la dictadura militar fue la oposición de izquierda reformista, llevó como vice presidente a Katia Abreu, una ex ministra de los gobiernos del PT aliada de los grandes latifundistas, logrando el 12,04 % 13,344,366 de votos, aumentando el número de diputados a 9, aunque redujo dos senadores, logrando la gobernación de Paraíba en coalición con el Partido

Socialista Brasileño (PSB). Gomez usó un discurso desarrollista y socialdemócrata recogiendo el cuestionamiento al régimen no expresado en el voto por Haddad.

El PSB si bien es un partido histórico reformista de izquierda, que no presentó candidatos presidenciales, sino solo para ambas cámaras del congreso, se ha caracterizado por realizar coaliciones con partidos conservadores obteniendo ahora las gobernaciones de Espiritu Santo y con el PCdoB la de Pernambuco.

Otras agrupaciones de izquierda que participaron consiguieron magros resultados, en menor medida el Partido Socialista y Libertad (PSOL) quien postuló para la presidencia al líder del Movimiento de Trabajadores Sin Techo Guillermo Boulos y la líder indígena Sonia Guajajara consiguiendo un 0.48 % 617,122 de votos en alianza con el ex estalinista Partido Comunista Brasileño; el PSOL está conformado por una serie de corrientes de izquierda y marxistas, que en las pasadas elecciones municipales consiguió aumentar el número de concejales y posicionándose en buen lugar en algunos distritos industrializados; esta elección pierde un senador y aumenta a 5 diputados. El Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) que postuló a la líder obrera Vera Lucia afiliado a la Liga Internacional de los Trabajadores con tan solo 0.05 % es decir, 55,762 votos. Y el Partido de la Causa Obrera que no presentó presidenciables sino solo para el congreso obteniendo menos del 0,0 %.

Como un sedimento formando desde las movilizaciones de 2013 que adquirió fuerza en una serie de huelgas obreras y movilizaciones populares contra el gobierno de Temer, siendo la más reciente en abril; pero que por la política conciliadora de las burocracias ligadas al PT y al PCdoB por un lado, la política sectaria del PSTU quien influye en algunos sindicatos y la falta de un frente unido obrero, no logró derrocar al gobierno de Temer. Esto, en un escenario de grave crisis económica, con una caída del PIB en los últimos tres años y la recuperación más lenta de la historia de este país, afectada aún más por la reciente huelga de camioneros que la extrema derecha usó para crecer electoralmente.

Ahora ante el avance de la extrema derecha está la opción de votar por el menos peor -Haddad- que bajo un discurso progresista, pese a ser ninguneado por la burguesía, pretende presentarse potable para ésta. Nosotros consideramos que solo la movilización masiva podría volcarse contra una victoria de Bolsonaro, como lo ha demostrado las mujeres con la movilización general del domingo 30 de septiembre bajo el lema contra Bolsonaro #ELENÃO mostrando su carácter de vanguardia y el camino a seguir. ■

OCTUBRE DE 1934: INSURRECCIÓN OBRERA EN ASTURIAS, ESPAÑA

La dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930 dejaba a la monarquía presidida por Alfonso XIII herida de muerte. Rápidamente los republicanos de todas las tendencias llegaron a un acuerdo a través del Pacto de San Sebastián, el 17 de agosto, con la intención de traer la República, conservadora para unos y democrática para otros.

Republicanos y socialistas fueron coaligados a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Lejos de esto, en las elecciones municipales triunfaron las candidaturas republicanas y socialistas en todas las grandes ciudades y en cuarenta y una de las cincuenta capitales de provincia. A pesar de que en el campo ganaron las candidaturas monárquicas gracias al aparato caciquil, fue un hecho asumible hasta por el propio Alfonso XIII que la Monarquía había perdido realmente las elecciones. Así, el rey partió para el exilio y el 14 de abril de 1931 se proclamaba la II República y el Comité

Revolucionario se convirtió en el Gobierno Provisional presidido por Alcalá Zamora y en el que había tres socialistas: Largo Caballero, Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos.

Se fue rápidamente a elecciones a Cortes constituyentes el 28 de junio de 1931(...) Alcalá Zamora será sustituido en la presidencia del gobierno por Manuel Azaña. Aprobada la Constitución el 9 de diciembre de 1931, el día 10 las Cortes, con mayoría republicano-socialista, eligen a Niceto Alcalá Zamora como presidente de la República y Manuel Azaña sigue a presidir el gobierno republicano-socialista.

Corrientes del movimiento obrero

Las dos grandes fracciones del movimiento obrero, la socialista y la anarcosindicalista, tenían proyectos divergentes. Los socialistas se presentaban a las elecciones en solitario y con un discurso de Largo Caballero girando a la izquierda después de su experiencia

en el gobierno, donde sacó la conclusión de que el gradualismo reformista no lo permitía la burguesía. Por su parte, los anarcosindicalistas diseñaron la táctica de la abstención activa a través de la consigna "frente a las urnas, la revolución social". Los comunistas eran minoritarios y, además, estaban divididos por influencia directa de lo que ocurría en el movimiento comunista a nivel internacional. El republicanismo de izquierda de Manuel Azaña era poca cosa sin la cobertura de masas del PSOE/UGT, tanto fue así que Azaña saldrá

y como exigía la ley electoral. Al final del escrutinio, la CEDA consiguió 115 diputados, 102 el PRR, 58 el PSOE y 1 el PCE. Los nacionalismos periféricos democráticos estaban representados por ERC, 19 diputados, en el caso catalán; por el PNV, en el caso vasco, con 12 escaños, y por la ORGA, en el caso gallego, que representaba más al republicanismo que al galleguismo, con 6 diputados. La cámara tenía un total de 470 escaños. La ley electoral premiaba a las coaliciones y penalizaba a los partidos que se presentaban en solitario. La burguesía había recuperado el poder político



Fracasa la Insurrección anarquista de diciembre de 1933

(...) Ante la nueva coyuntura política que se abrió en noviembre de 1933 con la victoria electoral de un partido antirrepublicano, la CEDA, y de un partido republicano de derechas, el PRR, el movimiento obrero va a accionar por separado. Las dos grandes fracciones, la anarcosindicalista y la

elegido "gracias a los socialistas de Bilbao que, sacrificando a un correligionario, lo llevaron al Parlamento". Por el contrario, el republicanismo de derechas sí tenía un partido con influencia de masas, el Partido Republicano Radical de Lerroux.

La derecha retoma la ofensiva Las elecciones legislativas se convocaron para el 19 de noviembre de 1933. Esta vez la derecha pura y dura, claramente antirrepublicana, se presentaba aglutinada en la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con un discurso profascista.

(...) El 19 de noviembre de 1933 votaron 8.711.136 de personas, el 67, 46% del censo electoral. Era la primera vez que la mujer votaba y además tenía más peso en el censo que los hombres, pero esto no varió la tendencia general del voto, que lo marcó la coyuntura. El 3 de noviembre se celebró la segunda vuelta en aquellas circunscripciones en que ninguna candidatura había alcanzado el mínimo del 40 por 100 del total de votos emitidos, tal

socialista, llamarán a su insurrección. (...) El epicentro de la insurrección estuvo en Aragón. En Zaragoza capital se luchó por las calles, se descarriló un tren proveniente de Barcelona. En poblaciones de Huesca, como fue el caso de Barbastro, se tomó el poder local y se proclamó el comunismo libertario. Pero fuera de Aragón sólo hubo escaramuzas ya que la insurrección no había sido asumida en la práctica por todas las regionales de la CNT, que dijeron sí a la Regional aragonesa sin íntima convicción. (...) El movimiento libertario se había vuelto a desangrar sin perspectiva alguna de victoria.

Auge revolucionario de los trabajadores

(...) Las movilizaciones del movimiento obrero continuaban, destaca la huelga general convocada por la CNT en Zaragoza el 4 de abril de 1934, que se prolongó hasta el 9 de mayo, y a la que también se sumó la UGT. Fue una huelga que empezó en protesta por los malos tratos propiciados a



presos obreros y en la que participaron los diversos sectores.

(...) El 5 de junio empieza una huelga general campesina en Andalucía, Extremadura y Castilla la Nueva dirigida por la FETT, el sindicato socialista del campo. La cosecha de trigo se había declarado por decreto "servicio público nacional". (...) Así, la huelga general en el campo fue derrotada, la FETT desmantelada temporalmente, hubo unos 10.000 detenidos, alrededor de 13 muertos y todo ello imposibilitará a los trabajadores campesinos participar en la insurrección de octubre.

La CEDA entra al gobierno

Alejandro Lerroux y Ricardo Samper, ambos del PRR, habían presidido gobiernos de republicanos de derechas con el apoyo de la CEDA pero sin su participación. Pero ahora Gil Robles ya presionaba para que la CEDA entrase en el gobierno. (...) Gil Robles dio una vuelta de tuerca y forzó la entrada de la CEDA en el gobierno el 4 de octubre, con tres ministros, aunque sin la participación del propio Gil Robles. La izquierda entendió que esto suponía el intento de traer el fascismo de manera institucional como había ocurrido ya en la Alemania de la República de Weimar y tocó a rebato porque suponía la "primera victoria oficial del fascismo. Aceptar esto, sin resistencia, sin lucha, sería tanto como prepararse la derrota, el aplastamiento, la tumba".

La clase trabajadora cierra filas

(...) la UGT y la CNT asturianas llegan a acuerdos muy concretos que plasman en el Pacto de Alianza Revolucionaria del 28 de marzo. (...) La unidad de acción entre la CNT y la UGT/PSOE de Asturias posibilitó que las otras fracciones del movimiento obrero se sumaran al Pacto de Alianza Revolucionaria. El BOC y la ICE lo hicieron de inmediato, el PCE, que había afirmado que "la Alianza Obrera es el nervio vivo de la contrarrevolución".

La insurrección de octubre de 1934

Si el día 4 de octubre de 1934 ya estaba formado el gobierno con tres ministros de la CEDA, el 5 de octubre, por orden del Comité Revolucionario socialista, ya estaba en marcha la huelga general y el paro era total en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo y Bilbao, entre otras. El 5 de octubre Madrid amaneció en huelga general, movilización que será una de las más prolongadas en la capital del Estado, hasta el día 12. La clase trabajadora estaba tan decidida a que la CEDA no entrase en el gobierno que "el 4 de octubre (en Madrid) no hubo necesidad de llamar a la huelga general, la gente la hizo espontáneamente. Así, en Madrid por la falta de distribución de armas a la clase obrera hubo muchas "milicias desarmadas".

El gobierno republicano-cedista intentó que los trabajadores de la administración estatal y municipal no fueran a la huelga. (...) La derecha también movilizó a sus juventudes para hacer de esquiroleros, fue el caso de las juventudes de Acción Popular, el núcleo de la CEDA, las JAP, y también a los señoritos y a los lumpen de Falange Española de las JONS (...) a realidad fue que la clase trabajadora no contó con programa, coordinación y armas por lo que los brotes insurreccionales en Madrid fueron en gran parte producto de las juventudes socialistas. (...) El día 8 ya empezaron a ser detenidos miembros del Comité Revolucionario Nacional y dirigentes de las organizaciones obreras. Largo Caballero terminó yéndose a instalar en su propia casa, allí le detendrán el día 14.

La Comuna asturiana

Asturias será el epicentro. El primer Comité Revolucionario Provincial es el Comité Ejecutivo Regional de la Alianza Obrera Revolucionaria de Asturias, compuesto por seis militantes del PSOE/UGT, tres de la CNT y uno del BOC, que también representa a la ICE.

(...) A las diez de la noche del día 4 de octubre de 1934 se decide desencadenar la insurrección obrera para el 5, (...) a la una de la madrugada del día 5 ya empiezan los disparos en Mieres, aunque la insurrección no se generalizará hasta las 05.00 horas. Se organizan las Milicias Obreras con dinamita de la cuenca minera, escopetas de caza, fusiles que se habían ido sacando de las fábricas de armas y municiones de fardos del barco Turquesa, que había conseguido desembarcar parte del material que traía en sus bodegas. Un armamento primario y escaso, muy inferior en cantidad y calidad al que cuentan las tropas del gobierno.

El día 5 la lucha se generaliza por toda la cuenca minera asturiana y se extiende a León y Palencia.

(...) La lucha llevó a que el movimiento obrero creara comités y milicias, lo que en la práctica suponía el embrión de un Estado socialista. El gobierno central que se dará la clase trabajadora asturiana, a través de los acuerdos de sus fracciones políticas, será el Comité Revolucionario Provincial.

(...) Nada estuvo parado, se aprovisionaba, se transportaba, se atendía a los heridos sin discriminaciones, se producía, se cuidaban las minas, se mantenían los hornos en funcionamiento, se cuidaba la retaguardia. Toda una estructura de un poder obrero embrionario en marcha.

(...) El número efectivo de milicianos armados rondarían los 15.000, suficientes para derrotar a las fuerzas del gobierno republicano en Asturias, cuyo número de efectivos andarían por los 2.700.

La contraofensiva gubernamental

(...) el domingo 7 puede desembarcar en el puerto de Gijón 600 soldados del 29 Regimiento de Infantería de Ferrol. El día 9 desembarcan fuerzas del Tercio, de los Regulares y Artillería. El Musel, puerto de Gijón, queda convertido en cabeza de playa de las tropas gubernamentales. Mientras, las tropas revolucionarias no reciben ninguna ayuda exterior ya que la revolución ha quedado aislada. Así, las tropas gubernamentales pueden lanzarse en masa contra las fuerzas proletarias que resisten en la barriada de El Llano. Las fuerzas obreras sólo le pueden oponer pistolas y sesenta fusiles con pocas municiones a las fuerzas gubernamentales.

(...) Las fuerzas obreras, que están escasas de municiones, problema general permanente que tuvieron siempre todas las tropas proletarias, van a retirarse. (...) Pero ya el gobierno puede enviar más fuerzas a Asturias. Así, van a ir llegando tropas del gobierno, tantas que el día 20 estarán cifradas en más de 20.000 efectivos.

(...) se reúne el Comité Revolucionario Provincial y los representantes de los comités locales. Se convoca asamblea y desde el balcón del ayuntamiento, Belarmino Tomás, en nombre y en compañía de los miembros del Comité Revolucionario Provincial, expone su entrevista con el general López Ochoa y defiende deponer las armas dado que la relación de fuerzas es desfavorable para los trabajadores, (...) La asamblea está cargada de tensión, no se quiere la rendición. (...) Ante la evidencia del aislamiento y de la falta de municiones la asamblea de trabajadores armados va asumiendo la necesidad del pacto.

El acuerdo tomado se comunica por toda la geografía revolucionaria, después el Comité Revolucionario de Asturias publica su último manifiesto: "El día cinco del mes en curso comenzó la insurrección gloriosa contra la burguesía, y después de probada la capacidad revolucionaria de las masas obreras para los objetivos de gobierno (...), estimamos necesaria una tregua en la lucha. Por ello, reunidos todos los comités revolucionarios con el provincial se acordó la vuelta a la normalidad, encareciéndoos a todos os reintegréis, de forma ordenada, consciente y serena, al trabajo. Esta retirada nuestra, camaradas, la consideramos honrosa por inevitable. La diferencia de medios de lucha (...) nos llevó por ética revolucionaria a adoptar esta actitud extrema. Es un alto en el camino, un paréntesis, un descanso reparador después de tanto surmenaje. Nosotros, camaradas, os recordamos esta frase histórica: «Al proletariado se le puede derrotar, pero jamás vencer». ¡Todos al trabajo y a continuar luchando por el triunfo! (18-10-1934)"





EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA: ¿MITO O REALIDAD?

Por *Hercilia Cáceres*

Desde que Murphy Olimpo Paiz, asumió como Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 28 de junio del presente año, su administración ha realizado un gran número de acciones que cada vez dejan más en claro su política de tipo neoliberal, que sin duda alguna muestra su interés por la privatización de esta casa de estudios. La USAC a pesar de ser la única universidad pública del país, desde inicios de este siglo, administraciones de turno se han encargado de reducir el número de estudiantes que ingresan como una medida para el problema de sobrepoblación universitaria, al que no le buscan soluciones concretas sino al contrario, se dedican a parchar las problemáticas para evitar un colapso cada vez más cercano. En esta ocasión, la administración de Paiz no se queda atrás con resoluciones que afectan principalmente a los aspirantes provenientes de instituciones públicas o de instituciones privadas de los mal llamados "colegios de garaje", quiénes lejos de ofrecer educación media de calidad se dedican a lucrar con los intentos de superación académica.

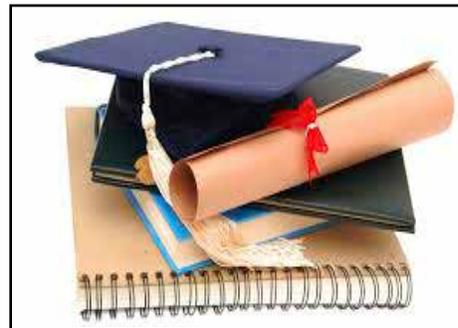
Las dificultades

El proceso de ingreso a esta universidad inicia por la prueba de orientación vocacional que tiene un costo de Q.50.00, al menos en el Campus Central. Posteriormente los aspirantes se someten a Pruebas de Conocimientos Básicos -PCB- que según el Sistema de Ubicación y Nivelación -SUN-: "son pruebas que miden el grado en que los aspirantes conocen, dominan y relacionan conocimientos en las áreas de Biología, Física, Lenguaje, Matemática y Química", dependiendo de los requerimientos de la unidad académica a la que se aspira. Luego de ser aprobadas las PCB, las personas deben realizarse Pruebas específicas, estas son: "los instrumentos que miden exclusivamente conocimientos, aptitudes, habilidades y/o destrezas específicas, requeridas por cada Facultad, escuela o centros regionales, de acuerdo con los perfiles de las carreras".

Cabe mencionar que son miles las personas que cada año se someten tanto a las PCB como a las pruebas específicas y son reprobadas en las cuatro oportunidades que la USAC

brinda. Al reprobar las pruebas el SUN presenta una "alternativa" para no someterse nuevamente a las pruebas: el Programa Académico Preparatorio -PAP-, en el que por medio de cursos a lo largo de 10 meses brindan el contenido de las PCB y las pruebas específicas para la facultad de ingeniería. Pero claro, el PAP no es gratis, tiene un costo de Q.350.00 independiente de la cantidad de cursos que sean asignados a lo largo del ciclo lectivo.

Guatemala es un país en el que menos del 2% de la población tiene acceso a la educación superior, a esto se le suman los filtros ya comentados y ahora la crisis presupuestaria a la que se enfrenta la USAC, buscan medidas



desesperadas por conseguir fondos que les permitan evitar el colapso financiero. Entre los intentos del Consejo Superior Universitario -CSU- se encuentra el aumento del examen de orientación vocacional de Q.50.00 a 100.00 y del PAP de Q.350.00 (de uno o más cursos durante todo el año) a Q.1000.00 anuales por cada curso. Asimismo, el PAP que dice ser un programa autofinanciable cuenta con un buen número de irregularidades, debido a que se desconoce el origen de los fondos ejecutados.

Muchos estudiantes se han mostrado a favor de estas políticas, lo que resulta preocupante, ya que cada vez ingresan menos personas con conciencia social. Existen muchas personas que para ingresar pueden pagar elevados costos o más, pero al mismo tiempo existe un sector que sacrifica incluso una semana de alimentos para poder aspirar a un mejor futuro. Conversaciones con asesores vocacionales del sector público aseguran que un buen número de estudiantes próximos a graduarse del nivel medio, no cuentan con los medios para pagar la cuota de Q.50.00 y por ello no ingresan a la universidad,

quedando como el porcentaje de jóvenes que ofrecen mano de obra barata o como una cifra más de desempleados.

Además de lo anterior, otra medida que se busca implementar es el aumento de la matrícula estudiantil de Q.91.00 anuales a una mensualidad de Q.50.00 desde los consejeros del CSU, quiénes han asegurado que la población estudiantil es "privilegiada" y por lo tanto tiene que prevalecer únicamente el sector con la economía necesaria para sufragar los gastos. De la misma manera, han calificado de "borrachos" a los estudiantes universitario, razón por la que asumen que cuentan con los medios necesarios para realizar estos aumentos, insultado la dignidad de los estudiantes y familias que con mucho sacrificio buscan la manera de culminar sus estudios superiores.

¿En realidad existen políticas de austeridad?

Lamentablemente Paiz busca cegar la realidad y maquillar la universidad como un centro de convivencia y amor llena de actividades como la carrera universitaria, un gran número de voluntarios y otras que requieren de grandes inversiones que no salen del bolsillo del señor rector. También existe la realización de compras innecesarias que se pueden verificar en el portal Guatecompras, demostrando que quieren tapar el sol con un dedo y hacer de memoria corta ante los problemas que orientan a la universidad hacia la una salida sin fondo.

Ante estas problemáticas que presentan políticas claves de privatización y exclusión de la educación superior, venimos repitiendo la exigencia del 5% del presupuesto nacional, a la que el rector se ha visto tibio debido a sus intereses por mantener vínculos con el gobierno de turno. Al mismo tiempo exigir un 100 % de transparencia porque la USAC no es una bola de cristal en la que no sucede nada, existe una cantidad impresionante de casos de corrupción como las escuelas de vacaciones, plazas fantasmas, entre otros. Por eso, realizamos un llamado a los diferentes sectores universitarios a que realicen las denuncias pertinentes, se unan en la lucha y no se deje el futuro de la educación superior en manos de los asesinos del intelecto del pueblo guatemalteco. ■



TRABAJADORES DEL MINED EXIGEN CUMPLIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL Y ESCALAFÓN

Por Juan Francisco Martínez

Producto de las luchas los trabajadores del Ministerio de Educación junto a sus representantes sindicales lograron con las autoridades del MINED un acuerdo de aumento salarial de \$100 para los trabajadores docentes y de \$60 para el personal técnico administrativo, el cual en 2018 ha sido pagado según lo acordado.

Violación de acuerdo

El acuerdo de incremento entre las autoridades del MINED y los sindicatos corresponde al año 2018 y el 2019, pero el cumplimiento de dicho acuerdo para los trabajadores administrativos del MINED se ve amenazado, al respecto en comunicado oficial del Ministro de Educación expone: "... para el 2019 este Ministerio se hecho las debidas solicitudes al Ministerio de Hacienda para que se realicen las erogaciones necesarias a esta cartera de Estado para realizar el pago de los \$60.00 para el personal técnico administrativo y de \$100.00 para el personal docente.

Que el día 02 de octubre del presente año fue publicado en la página web del Ministerio de Hacienda el proyecto de Ley de Salarios del Ministerio de Educación para el año 2019, en el cual se advierten dos situaciones que podrían generar inconvenientes legales administrativos: 1) Se ha incluido en cada una de las categorías que conforman la tabla salarial del sector docente los \$100.00 de incremento lo cual provoca una ruptura en el sistema escalafonario establecido en la Ley de la Carrera Docente. 2) No se ha regulado en ninguna parte de dicho proyecto lo relacionado al aumento de los \$60.00 para el personal técnico administrativo."

Lo anterior estaría violentando lo acordado entre las autoridades del MINED y sindicato lo cual llevaría a que los trabajadores administrativos reaccionen. Al asignárselo solo aun sector el gobierno busca dividir a los trabajadores.



ATramec en defensa del incremento salarial y el escalafon

La falta de asignación de los fondos en el presupuesto para cumplir el aumento de salario que se había acordado para el 2019 llevo a que el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación (ATramec) junto a los trabajadores realizara acciones de protesta para exigir dicho incremento salarial para el 2019 el cual debe ser aplicado al salario base.

Los trabajadores administrativos junto a ATramec y apoyados por otros sindicatos de docentes como SIMEDUCO, BASES MAGISTERIALES y otras organizaciones realizaron acciones de hecho como fueron la reducción de labores en varias oficinas departamentales del MINED así como también a nivel central.

Como resultado de las medidas se logró entablar una mesa de diálogo y negociación entre ATramec y las autoridades del MINED en donde ATramec exigió a las autoridades que

el incremento salarial sea incorporado al salario y se exprese la seguridad del incremento de los \$ 60.00.

Como parte de los acuerdos las autoridades se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para que el gobierno asigne los fondos económicos así mismo acordaron una reunión para el lunes 22 de octubre en donde las autoridades deben informar los avances de las gestiones para garantizar el incremento. De no obtener resultados se estaría volviendo a las acciones.

Negociación y acciones de presión

Posterior a dicha reunión y dado los acuerdos tomados ATramec levanto las acciones e informo a los trabajadores en lucha los acuerdos a los cuales habían llegado, con lo anterior los trabajadores junto a ATramec están dando una muestra de confianza a los autoridades, esperando no ser defraudado.

De igual manera ATramec se pronuncio en defensa del personal contratado de servicio y realizo el llamado a todos los trabajadores a denunciar todo violación a los derechos laborales.

La lucha por la asignación de los fondos para el incremento de los \$60.00 para el personal técnico administrativo y pago del escalafón pasa necesariamente por la Asamblea Legislativa.

Todos los trabajadores deben estar atentos al llamado de las acciones convocadas por ATramec con la finalidad de exigir el incremento, de igual manera todos los sindicatos del MINED deben buscar la unidad en la acción. ■



DESPEJANDO DUDAS SOBRE EL MANIFIESTO DE LA UNAB

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Finalmente, después de largas negociaciones, el pasado 4 de octubre, se dio a conocer al público la constitución de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) conformada por dos importantes organizaciones: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la Articulación de movimientos sociales, que agrupa a la mayor parte de ONGs y movimientos sociales.

De manera un poco extraña, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), no aparecen entre los firmantes del Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia. No obstante, estas cámaras empresariales siguen participando en la ACJD, siendo en los hechos quienes imponen la línea política.

Divisiones y miedo de los empresarios

En las últimas semanas ha sido notoria el decaimiento y la crisis de la ACJD, debido a las vacilaciones de los empresarios. La ofensiva militar de la dictadura, y las invasiones de propiedades, han dividido a los empresarios en dos corrientes: una que quiere una negociación a cualquier costo con la dictadura, y otra que sigue forcejeando para lograr el adelanto de las elecciones, y de esta manera lograr el cambio de gobierno. A pesar de sus diferencias tácticas, ambos sectores empresariales coinciden en tenerle miedo a la dinámica revolucionaria de la movilización de masas. No duermen pensando en la posibilidad que los

acontecimientos terminen en otra revolución, como en 1979.

La crisis de la ACJD no ha sido por la falta de empuje del movimiento de masas, sino porque los temores de los empresarios han terminado paralizándola. No obstante, a pesar de la enorme represión contra la dirigencia estudiantil agrupada en la Articulación (hay más de 300 presos políticos), las movilizaciones y marchas han continuado, en la mayoría de los



casos pese al solapado boicot del COSEP. La crisis de la ACJD se ha manifestado en rupturas y denuncias públicas de algunos de sus dirigentes, todas ellas repudiando las maniobras y vacilaciones del COSEP.

Presiones por la unidad contra la dictadura

Bajo las difíciles circunstancias de la represión, crece la presión popular por la unidad contra la dictadura. A mediados de septiembre, la Articulación lanzó la propuesta pública de crear una Concertación Nacional Azul y Blanco contra la dictadura, una especie de alianza amplia con el objetivo de juntar fuerzas para derrotar al gobierno Ortega-Murillo.

Presionada por la realidad y por su propia crisis interna, la ACJD abandono la soberbia que le caracterizaba, de creer que era la única organización que

luchaba contra la dictadura, y aceptó la propuesta de crear un nuevo organismo, la UNAB, que en el fondo es una alianza con la Articulación, la coordinadora de movimientos sociales sobre los cuales ha recaído el peso de la movilización social en los últimos meses, marcados por una dura represión por parte de la dictadura

En cierta medida, podemos concluir que la propuesta de la Articulación se hizo realidad con la conformación de la UNAB. El jueves 4 de octubre, en una improvisada conferencia de prensa, se dio a conocer la UNAB, conformada por 43 organizaciones, siendo movimientos sociales en su mayoría. El anuncio desencadenó una ola de simpatías por parte de la población, que siente la necesidad de pasar a acciones de mayor envergadura contra la dictadura.

El Manifiesto de la UNAB

Al constituirse la UNAB, se dio a conocer el Manifiesto de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia, una proclama política que contiene una especie de programa o plan de acción de la nueva organización. Entre los documentos anteriores de la Articulación y de la ACJD existen muchos puntos en común, pero también hay diferencias importantes, que vale la pena analizar.

Los portillos de la "justicia transicional"

El primero cambio o concepto nuevo que se introdujo en el Manifiesto fue el de "justicia transicional". En el punto número uno de los Compromisos, el Manifiesto expone. "Que no haya impunidad ante los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo y que se



aplique la justicia transicional, basado en la verdad, justicia reparación y garantía de no repetición (...)."

La "Justicia Transicional" no está incorporada a ningún tratado internacional específico, sino que forma parte de las continuas declaraciones aprobadas en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En un famoso informe del año 2004, sobre "El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos", Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, manifestó lo siguiente:

"(...) 25.- En otros casos, la comunidad internacional se ha lanzado a prescribir una fórmula específica de justicia de transición, haciendo hincapié bien en los juicios penales o en la búsqueda de la verdad, sin dar la oportunidad a las víctimas y los grupos del país a que consideren y decidan cuál es el punto de equilibrio adecuado. La comunidad internacional debe ver en la justicia de transición algo que va más allá de los juzgados y tribunales. Los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho".

El informe detalla los objetivos centrales de la "justicia transicional": "8.- (...) que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación. Tales mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales y tener distintos niveles de participación internacional (o carecer por complejo de ella) así como abarcar el enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos".

Y en otra parte del extenso informe aclara que "39.- (...) Ahora bien, no resulta sencillo alcanzar y equilibrar los objetivos de la justicia penal y en los períodos de transición hay numerosas

limitaciones que reducen su alcance, ya se trate de los recursos, el volumen de casos o el equilibrio del poder político".

El concepto de "justicia transicional" se ha puesto de moda en aquellos países que han sido desgarrados por graves conflictos sociales, guerras civiles, dictaduras militares que cometen masivas violaciones de derechos humanos, etc. En América Latina destacan los casos de Argentina después de la dictadura militar, Chile después del régimen fascista de Pinochet, Perú después de la liquidación de la guerrilla de Sendero Luminoso, y el caso más notable es el de Colombia, con los recientes acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. En todos ellos se ha aplicado la llamada "justicia transicional".

En Centroamérica, al terminar los conflictos armados y guerra civiles de Nicaragua, (1982-1990), El Salvador (1980-1992) y Guatemala (1954-1996) no se aplicó la "justicia transicional", sino que el otorgamiento de amnistías generales en todos los países promovió la impunidad. Las heridas siguen sangrando todavía.

Por ello es que, a raíz de las masacres cometidas por la dictadura orteguista, la propuesta de "justicia transicional" aparece atractiva, aunque en realidad no lo sea. Ya hemos visto cuales son los principales objetivos de la "justicia transicional": la reconciliación y el equilibrio del poder político.

En Nicaragua existe un rechazo masivo a una posible negociación que implique conceder una amnistía general que beneficie a Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a todos los altos mandos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Más de 500 muertos en las protestas sociales han creado una conciencia favorable al enjuiciamiento de la camarilla gobernante. Precisamente este punto de la amnistía general es lo que ha paralizado las negociaciones del Dialogo Nacional. El tema de la justicia se ha vuelto toral.

¿Hasta dónde puede llegar la "justicia transicional" en el caso de Nicaragua? El modelo de justicia transicional propuesto por la UNAB no implica el desmantelamiento del aparato represivo y de las instituciones

del Estado, actualmente controladas por la dictadura orteguista, sino la simple depuración o reforma de las mismas. Lo anterior implica algún grado de acuerdo mínimo entre las fuerzas políticas existentes, para acordar hasta donde llegará esa "justicia transicional". Este modelo de justicia de la ONU contempla tomar en consideración a las víctimas, lo que es importante, pero víctimas hay de los dos lados, no dicen ni menciona donde está la mayoría de las víctimas.

En pocas palabras, con algunos grados de castigo que es difícil prever, la "justicia transicional" abre un pequeño portillo por donde se puede colar el respeto a la familia dinástica.

La supervivencia del modelo económico neoliberal

En los puntos número nueve y once del Manifiesto, se colaron de contrabando unas líneas que representan un duro golpe para los movimientos sociales de la Articulación, que siempre han luchado contra las políticas neoliberales de los diferentes gobiernos:

"9.- Un modelo de desarrollo socioeconómico que promueva el libre mercado y el bienestar social (...) 11.- Respeto a la propiedad privada."

Esta es una formulación de la economía neoliberal que defienden a capa y espada los empresarios del COSEP y de ANCHAM, y que lograron fuera aprobado en la UNAB. No se trata de la defensa de la propiedad de los pequeños y medianos productores, sino de una defensa cerrada del derecho de propiedad en general, que beneficia a los banqueros y grandes grupos económicos.

Entonces, la gran duda en el ambiente, es: ¿si la UNAB es una alianza para la lucha inmediata contra la dictadura, mediante la unidad de acción y de movilización de los diferentes sectores sociales, o si estamos frente a la ante sala de una alianza electoral de cara a las posibles elecciones anticipadas? ■

EL PARTIDO NACIONAL Y LA PROFUNDIZACIÓN DEL NEOLIBERALISMO (2010-2018)

Por Felipe Suazo Amaya

Honduras ingreso en el siglo XXI con las secuelas de una catástrofe natural espeluznante: El huracán Mitch (1998), difícil de olvidar en nuestra historia reciente. Desde finales de la década de 1980, Honduras arrastraba una enorme deuda externa de 2931 millones de dólares. Eran tiempos de conflicto social en Centroamérica, pero también de expansión de las políticas neoliberales en la región. Desde entonces, un huracán económico, al que llamamos neoliberalismo, se ha entronizado en la región.

Los ajustes estructurales en Honduras en la década de 1990

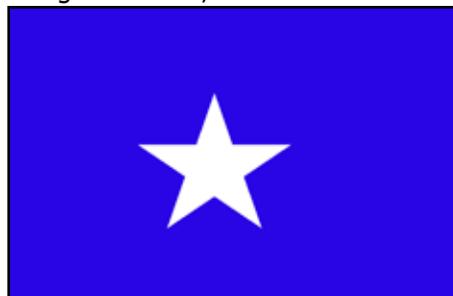
Los antecedentes del neoliberalismo en Honduras hay que rastrearlos en 1980 bajo los gobiernos liberales de Roberto Suazo Córdoba (1982-86) y José Azcona (1986-90). No obstante, el principal gestor de esta doctrina globalizante y económica, auspiciada por los organismos internacionales, fue puesto en vigencia, por el cuestionado presidente nacionalista, Rafael Leonardo Callejas (1990-94), bajo los famosos ajustes estructurales.

En efecto, la década de 1990, se caracterizó por la liberación de la economía, poca intervención del Estado, devaluación de la moneda, etc. Por tanto, en nombre de la estabilización y liberación de la economía se inició un proceso lento de desestabilización de las empresas del Estado. Fue una era de sometimiento a la nueva cara del capitalismo mundial, después de la caída del socialismo real: el neoliberalismo globalizado. La corrupción llevada a cabo por, Rafael L. Callejas, lo llevó a los tribunales en muchas ocasiones. De todas las acusaciones salió invicto (le otorgaron 16 cartas de libertad), preconizando una de las tantas parodias de la historia de la corrupción en Honduras. No obstante, desde el 2013, está preso en Estados Unidos por acusaciones de corrupción como directivo de la FIFA.. Su amo proveniente del norte,

al que tanta fidelidad le dio, término traicionándolo. Es algo común en la geo estrategia de Estados Unidos utilizar peones en los países que quieren influir, para luego darles un puntapié cuando ya no los necesita.

La profundización del neoliberalismo en el gobierno de Pepe Lobo 2010-2014

Desde que el Partido Nacional (PN) volvió al poder en el 2010, tras la coyuntura política del golpe de Estado del 2009, las distintas élites lanzaron una estrategia para profundizar las políticas neoliberales. Las dinámicas seguidas han sido generar una red de corrupción de gran escala, endeudamiento del



Estado con la banca privada nacional, entrega de los recursos ambientales a inversores extranjeros y nacionales, y desde luego, un resquebrajamiento de la mayor parte de las instituciones del Estado.

El gobierno del liberal de José Manuel Zelaya (2006-2009), apenas fue un paréntesis, de la influencia de los organismos internacionales en Honduras. Tras los fuertes encontronazos con el mandatario Manuel Zelaya, los sectores oligárquicos llevaron una campaña de destrucción del poco patrimonio del Estado. Después de la expulsión de Honduras en la OEA, diversas ayudas internacionales y préstamos fueron congelados en este país. La estrategia en momentos del cierre del financiamiento internacional, fue el endeudamiento con la banca privada nacional, para maniobrar con el equilibrio fiscal y la balanza de pagos, en un país que vive de la entrada de remesas y ayudas internacionales para sostener su pírrica economía.

Cuando JOH era presidente del Congreso Nacional, y tras ganar las elecciones internas, dentro de su partido, introdujo el Decreto 266-2013, donde se adjudicó un poder absoluto sobre todas las dependencias del Estado. Seguro de ganar las elecciones en 2013 –cuestionadas por fraude, igual que las recientes en noviembre del 2017– frente a la presidenciable Xiomara Castro de Zelaya, todos mirábamos venir un gobierno despótico. El cambio de gobierno de Pepe Lobo a Juan Orlando Hernández (JOH), se dio en pleno contexto de las protestas contra el desfalco del Seguro Social en 2013.

Neoliberalización bajo los gobiernos de JOH

Tras desvirtuar el artículo pétreo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial, siguiendo el camino de la izquierda del siglo XXI, paradójicamente, el gobierno maniobró en la Sala de lo Constitucional para habilitar a JOH, para postularse en la presidencia por segunda vez. Entre 2014-2018, las políticas económicas conllevaron a la neoliberalización absoluta de la sociedad hondureña. Llamamos neoliberalización a la puesta en práctica una estrategia para privatizar las empresas del Estado, incluir al sector privado con políticas públicas de inversión conjunta, crear un aparato militar preventivo contra cualquier intento de insurrección popular, manipulación de los controladores del Estado, como medios de blanqueamiento de los continuos casos de corrupción.

El Estado de bienestar en Honduras es apenas un recuerdo de las décadas de 1960 y 1970. ¿Cuáles han sido los impactos del neoliberalismo en Honduras? La deuda externa ha pasado de 3, 500 millones en 2009 a 7, 200 millones de dólares en 2018. Los derechos laborales pasaron del contrato colectivo al contrato por hora. Las jubilaciones pasaron del sector público al privado. Tenemos una deficiencia en seguridad, salud, educación, etc. ■



¿PARO NACIONAL O PARO DE CONSUMO?

Por Melchor Benavente

En los más de seis de meses de lucha contra la dictadura orteguista, las masas populares han utilizado todos los mecanismos de lucha: marchas, plantones, manifestaciones, barricadas, tranques, se han defendido a pedradas contra las balas asesinas. Han desplegado un heroísmo sin límites, aunque el costo ha sido enorme: más de 500 muertos, más de 300 prisioneros políticos, más de 2,000 heridos, y decenas de miles de personas forzadas al exilio, para escapar de la represión.

Los paros nacionales a cuenta gotas

Los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), antiguos aliados del régimen dictatorial, dieron un bandazo después del inicio de la insurrección, en abril de este año, pasando a la oposición, creando la Alianza Cívica por la Justicia y la democracia (ACJD) como un mecanismo de presión social, para obligar a Ortega a negociar el adelanto de las elecciones.

Como parte de esas presiones, los empresarios han realizado tres paros nacionales de un día cada uno. El primero paro nacional fue convocado para el jueves 14 de junio, el segundo paro fue convocado para el viernes 13 de julio, y el tercer y último paro fue convocado para el viernes 7 de septiembre.

Estos paros nacionales fueron convocados por el COSEP bajo una enorme presión popular, que demandaba medidas contundentes para derrocar a la dictadura. En los meses de ascenso revolucionario, abril, mayo y junio, el COSEP maniobró para disipar la energía revolucionaria de las masas en paros nacionales simbólicos de un día, a cuenta gotas.

Un nuevo invento: el paro de consumo

La represión desatada por la dictadura tiene en la cárcel a los más destacados dirigentes del movimiento estudiantil, en el clandestinaje a otra parte, y en el exilio a la parte restante. Pero el clamor popular a favor del paro nacional no ha desaparecido, más bien ha crecido la desconfianza hacia



los empresarios, por sus vacilaciones y negociaciones secretas con la dictadura.

Entonces, para no quedar descolgados ante la mayoría de la población, en las últimas semanas los ideólogos a sueldo del COSEP, han inventado la teoría del "paro de consumo" en sustitución de los paros nacionales de un día. Y algunos medios de comunicación le dieron una gran cobertura a la novedosa idea del paro de consumo.

¿En qué consiste? En apagar las luces por las noches, durante una hora, para que el medidor marque menos, y de esta manera la familia Ortega-Murillo, que maneja el negocio de la energía eléctrica, no recibe más ingresos. De la misma forma, no se debe consumir combustible en determinados días, ni hacer comprar en ningún negocio, porque de esta manera el gobierno de Ortega recibe menos impuestos.

Esta loca idea del paro de consumo tuvo algún grado de aceptación en las redes sociales, pero es difícil medir su

real impacto. Decimos que es una loca idea, porque en Nicaragua, por los altos niveles de pobres y de desempleo, el consumo es muy bajo. En realidad, la mayoría de los nicaragüenses vivimos en paro de consumo forzado permanente, a duras penas consumimos las calorías necesarias para mantenernos con vida.

Esta ideología reaccionaria del paro de consumo, fue rescatada por el COSEP de experiencias de otros países, en donde el boicot acordado por una ciudadanía culta y bien alimentada, puede llegar a tener algún impacto económico, pero que no es aplicable a nuestro país, por los enormes índices de pobreza y desempleo. En realidad, la teoría del paro de consumo es para tapar la cobardía y las vacilaciones del COSEP, que cuida más su bolsa que el futuro de las instituciones del Estado.

La CUDJ demanda un paro nacional de 72 horas

Pero los luchadores aprenden de los trucos del COSEP. La represión de la dictadura ha sido tan intensa, que una buena parte de la dirigencia estudiantil esta presa. Todos reclamamos acciones reales contra la dictadura, y ya no sacar solo comunicados. Pues bien, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ), más otros movimientos sociales, han emplazado al COSEP y AMCHAM a que se pronuncien sobre la necesidad de convocar a un paro nacional de 72 horas, como inicio del paro nacional indefinido.

Pero lo más importante, no solo es desenmascarar a los cobardes empresarios, sino estar claros que el futuro paro nacional solo será una realidad, si lo convocamos desde los barrios, colegios, y centros de trabajo, nosotros mismos, trabajadores y estudiantes. ■



LA TRAGICOMEDIA DE LA SEGUNDA CONFERENCIA SOBRE PROSPERIDAD Y SEGURIDAD

Por Armando Tezucún

Los días 11 y 12 de octubre, en la ciudad de Washington, se llevó a cabo la segunda Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. La primera conferencia se llevó a cabo en junio de 2017 en Miami, y en junio del presente año el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió en la ciudad de Guatemala con los mandatarios del Triángulo Norte, encuentro en el que se programó la segunda conferencia.

El tema sigue siendo la permanente crisis migratoria provocada por los acuciantes problemas de hambre, falta de oportunidades y violencia que reinan en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2017, según datos oficiales, 27,114 personas procedentes de El Salvador trataron de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, 23,067 guatemaltecos lo hicieron, al igual que 20,226 hondureños. Estas cifras han aumentado en 2018 a 42,757 en el caso de Guatemala, y 33,123 en el caso de Honduras; solamente la migración salvadoreña ha bajado a 11,525.

En la conferencia estuvieron presentes por parte de Estados Unidos el vicepresidente Pence, el Secretario de Estado Mike Pompeo y la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen. Por parte de México el secretario de Gobierno Alfonso Navarrete y el canciller Luis Videgaray. Los países del Triángulo Norte estuvieron representados por los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras, Jimmy Morales de Guatemala y el vicepresidente salvadoreño Óscar Ortiz.

Recordemos que en los dos encuentros anteriores los representantes del imperialismo llegaron a imponer y exigir acciones y medidas a los gobiernos serviles del área, quienes no han hecho más que agachar la cabeza e implorar migajas. En junio del año pasado

Pence afirmó: "...Lo primordial para el presidente Trump es la seguridad de los Estados Unidos, pero él sabe que la seguridad y prosperidad de la región está directamente vinculada



con la nuestra". En junio del presente año el vicepresidente gringo repitió el tono prepotente: "Este éxodo tiene que terminar, es una amenaza a la seguridad de EE. UU. y, como nosotros respetamos su soberanía, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra".

En esta segunda conferencia la escena no fue muy distinta. Pence insistió en la necesidad de enfrentar las raíces de la migración y el narcotráfico dentro de Centroamérica y giró instrucciones a cada uno de los mandatarios sobre las tareas pendientes, "Presidente (Juan Orlando) Hernández, le alentamos, con gran respeto, a seguir redoblando esfuerzos para incrementar el número de policías fronterizos para combatir el tráfico de personas (...) Presidente (Jimmy) Morales, con igual respeto, le alentamos a destinar todavía más recursos para asegurar su frontera, tome más ventaja de la fuerza especial de seguridad fronteriza que Estados Unidos ya estableció (...) Vicepresidente (Óscar) Ortiz, le alentamos a expandir el programa Salvador Seguro para reducir la delincuencia en su país" (Proceso 12/10/18).

Esta vez la novedad fue la advertencia de parte del imperialismo gringo sobre las relaciones entre los

países de la región y China. "Les digo a cada uno de los países representados aquí, en nombre de mi gobierno, en un momento en que ustedes construyen asociaciones comerciales con otras naciones como China, les pedimos que se concentren y les pedimos transparencia y que piensen en sus, y en nuestros, intereses a largo plazo...Hoy, en un momento en que China intenta expandir su influencia en la región, creemos que la mejor manera de resolver estos problemas es el fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte", dijo Pence (Prensa Libre 12/10/18). Hasta el momento Costa Rica, Panamá, El Salvador y República Dominicana han roto relaciones con Taiwan para favorecer los intercambios con China, esto sin duda es percibido como una amenaza en momentos que la administración Trump impulsa una guerra comercial con el gigante asiático.

La contraparte de esta tragicomedia, los presidentes del Triángulo Norte, compitieron entre sí para demostrar quién ha tenido más logros y se esforzado más en frenar la migración y combatir el narcotráfico. Todos finalizaron sus discursos exaltando la colaboración de sus gobiernos y pidiendo prebendas, ya sea dinero o que se suavicen las políticas sobre el TPS o "tolerancia cero". Quien se llevó el premio en ridiculez y servidumbre fue el presidente guatemalteco Jimmy Morales, quien hasta afirmó que su gobierno capturó a cien terroristas vinculados con Isis, se quejó de la Cicig y finalizó pidiendo un préstamo de US\$ 15 mil millones para infraestructura.

Exigimos el cese de las políticas represivas de la administración Trump contra los migrantes centroamericanos, la implementación de programas de empleo para ellos y la solución inmediata de su situación migratoria.

